

El Neoliberalismo y su impacto en Venezuela

Quiero agradecer a la Academia de Ciencias Sociales, al Instituto de Estudios sobre América Latina y a la Embajada de Cuba esta oportunidad para celebrar el 50° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Cuba con un encuentro que nos permite exponer nuestras ideas y, más que eso, nuestras experiencias sobre el "Neoliberalismo: agonizante pero no acabado" que ha sido enfrentado de diferentes formas por cada uno de nuestros países pero que ha tenido impactos similares en el desarrollo de nuestras sociedades.

Mi exposición estará centrada en presentar la situación venezolana y el impacto de las medidas neoliberales impuestas en nuestro país en la década de los ochenta y de los noventa, por parte de los organismos financieros internacionales, particularmente las instituciones de Bretton Woods: Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial.

Como todos ustedes saben, Venezuela es un país con grandes riquezas minerales, recursos naturales renovables y no renovables, fundamentalmente petróleo, que es la principal fuente de ingresos.

A principios de la década de los ochenta el modelo económico basado en la dependencia del petróleo comenzó a agotarse, debido a la caída de los precios del crudo, haciendo indispensable transformaciones substanciales en la dirección de la economía. En 1983, el gobierno del Presidente Luis Herrera Campins alteró una paridad histórica sobrevaluada del bolívar respecto al dólar y desató la inflación y la crisis económica en el país. Este hecho se conoció como el famoso "viernes negro".

La mayor parte de esa década transcurrió con gobiernos sin rumbo, caracterizados por la ineficacia y la corrupción ante una crisis económica que se profundizaba, debido a una caída del producto interno bruto por habitante, una deuda externa creciente y un incremento global de los precios. Se duplica la pobreza y se triplica la indigencia. La incapacidad del Estado para redistribuir la renta y

sus deficiencias en la gestión de los servicios públicos fue el resultado del clientelismo, el control partidista sobre la función del servicio social, la corrupción administrativa y la ausencia de políticas de todo orden.

En estas condiciones se realizan elecciones en Venezuela y en 1989, asume la presidencia Carlos Andrés Pérez, con una fastuosa ceremonia que se conoció como "la coronación", en la cual se gastaron millones de bolívares, mientras que la situación económica colapsaba. Los graves desequilibrios macroeconómicos, caracterizados por una alta inflación, un elevado endeudamiento externo y un enorme déficit fiscal, unido al deterioro de los precios del petróleo llevó a que el Gobierno de Pérez acudiera a las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para renegociar la deuda externa, aceptando a cambio los condicionamientos de estos organismos que fueron presentados al país como una medicina amarga, que tendría que tomar Venezuela para salir de la crisis.

Lo anterior no era otra cosa que implementar las políticas del Consenso de Washington, es decir en lo que "Washington está de acuerdo". Significa que los países en desarrollo deben acatar al pie de la letra las directrices políticas y económicas promulgadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Congreso de los Estados Unidos, la Reserva Federal, los altos cargos de la Administración y los grupos de expertos, entre otros.

A Venezuela se le impuso la receta del FMI llamada "recomendaciones del FMI" bajo el supuesto de que "...la habilidad de Venezuela para obtener nuevo financiamiento en el exterior dependía del programa económico a ser implementado"¹. Este programa, aplicado como una terapia de *shock*, incluía la restricción del gasto fiscal; congelamiento de los salarios; recorte del gasto público y social; reducción de los subsidios y creación de nuevos impuestos; eliminación del control de precios; unificación del régimen cambiario; liberación de las tasas de interés y eliminación de los créditos preferenciales para la agricultura; aumento de las tarifas de los bienes

¹ . FMI, Venezuela: Staff Report for the 1987 Article IV Consultation. 16 de octubre 1987. (Confidencial). p. 23.

y servicios, incluyendo los productos petroleros y liberalización de las importaciones.

Estos compromisos los adquiere el Gobierno venezolano en Washington a finales de febrero de 1989, mediante la firma de una Carta de Intención que no fue sometida ni siquiera a la consulta del Congreso de la República, y que el pueblo conoció cuando ya estaba firmada.

La receta para Venezuela no tuvo nada de particular ya que era igual para todos los países en desarrollo. La diferencia, en el caso venezolano, es que produjo una reacción espontánea popular que se conoce con el nombre de "El Caracazo", (27 y 28 de febrero 1989). Esta fue una protesta ante el deterioro de las condiciones de vida de la población. Caracas y otras ciudades principales del país fueron estremecidas durante una semana por los disturbios y saqueos populares más extendidos y violentos de que se tenga memoria. La represión fue brutal.

El detonante de esa reacción fue el aumento del precio de la gasolina, que no fue la única de las recetas implementadas pero fue la que tuvo un impacto directo al bolsillo de los venezolanos, ya que al aumentar el transporte, aumentó también el precio de los alimentos y el costo de los bienes y servicios.

A pesar de estas manifestaciones, el Gobierno continuó la aplicación de la receta del FMI al pie de la letra. Las medidas tuvieron como efecto una recuperación temporal de la balanza de pagos y de las reservas internacionales, en detrimento del nivel de vida de la población y los planes de desarrollo económico y social. Este excedente se destinó a cumplir puntualmente con los compromisos internacionales recién renegociados. Entre 1989 y 1992 el pago de intereses y capital de la deuda externa alcanzó US\$ 15.543 millones, mientras que sólo se recibieron nuevos préstamos por US\$ 6.398 millones. A pesar de la diferencia de US \$9.145 millones entre estas dos cifras, para el año 1992 el monto total de la deuda había aumentado en US\$ 518,8 millones en comparación con lo que se debía en 1988. O sea, que el mayor éxito de estas medidas fue sacrificar a la población para cumplir con los pagos de la deuda externa y tres años después de estos esfuerzos se debía más que al comienzo. En paralelo, creció la pobreza. Venezuela se encontraba

con un doloroso panorama de casi el 80% de pobreza, 15% de ella crítica.

A partir del año 1993 se profundizó la crisis económica en el país. Cayeron las exportaciones, aumentó la dependencia de la economía petrolera, se deterioraron las situaciones de la agricultura, la industria, el empleo y los servicios, afectando las condiciones de vida de la mayoría de la población. Esta dramática situación de la economía venezolana sumada a la corrupción generalizada del Gobierno llevó a dos levantamientos militares que culminaron con la destitución, en marzo de 1993, del Presidente Carlos Andrés Pérez por decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Al caer Pérez, y entrar el nuevo Gobierno constitucional de Rafael Caldera, se desató la crisis financiera, lo que puso la guinda a la torta de la destrucción del país. El remedio a la crisis financiera fue inyectar millones a la banca, sin importar la suerte de los ahorristas. Los responsables, por supuesto, huyeron del país.

El nuevo Gobierno acudió al FMI e introdujo nuevas recomendaciones del organismo financiero en la denominada Agenda Venezuela. Los resultados fueron nuevamente nefastos. Se devaluó la moneda, aumentaron los precios de bienes y servicios, especialmente los combustibles, se redujo el poder adquisitivo y un gran porcentaje de las pequeñas y medianas industrias se vieron obligadas a cerrar. El Gobierno de Caldera fue el responsable de la política de privatización de los activos estatales, entre ellos las empresas estratégicas de energía eléctrica, telecomunicaciones y varias industrias básicas, así como del intento de privatizar la principal industria del país, el petróleo, mediante la política de apertura petrolera. En su Gobierno el precio del petróleo llegó a estar por debajo de los 7 dólares el barril, con una política inducida desde Washington orientada a facilitar el camino de la privatización y combinada con medidas que pretendían separar a Venezuela de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). De hecho, al final de su mandato la desincorporación de Venezuela era dada como cierta por los demás miembros de la OPEP.

Este fue el panorama que se encontró el Presidente Chávez cuando llegó al poder en diciembre de 1998, con el respaldo de los votos del 68% de los venezolanos y prácticamente sin abstención; es



decir, con unas cifras de apoyo nunca antes vistas en la historia electoral del país. En ese momento murió el neoliberalismo en Venezuela y comenzó un proceso de recuperación lento, sufrido, interrumpido por intentos de golpe de estado, saboteos a la industria petrolera y una campaña bien dirigida y multimillonaria que ha sido muy difícil contrarrestar. Desde el punto de vista del daño que le hizo a Venezuela el neoliberalismo, podemos decir que se ha logrado en estos 10 años un avance mayúsculo: no tenemos deuda pública externa, rescatamos los niveles de las reservas internacionales, no nos manda el FMI, no nos salimos de la OPEP, hemos recuperado el precio del petróleo que hoy es estable y justo, Venezuela es un país libre de analfabetas, la industria petrolera se desarrolla con principios nacionalistas lo que nos ha permitido contar hoy en día con la seguridad de reservas de petróleo probadas de más de 250 mil millones de barriles, las segundas a nivel mundial y esto lo hemos logrado por un proceso de cuantificación y certificación que realizamos acompañados de nuestros socios internacionales entre los cuales se encuentra China.

Muchas Gracias.